

DOMINACIÓN, CONFRONTACIÓN Y ACUERDO. LA INTERVENCIÓN DEL FMI EN LA CRISIS ARGENTINA DURANTE 2002

Domination, confrontation and agreement. The
intervention of IMF in the Argentine crisis during 2002

*Pablo Nemiña*¹

INTRODUCCIÓN

Por su intensidad y duración, la intransigencia mostrada por el Fondo Monetario Internacional (FMI o Fondo) a partir del estallido de la crisis de convertibilidad en Argentina a finales de 2001, constituye un caso testigo del comportamiento confrontativo del organismo frente a un país que solicita su asistencia durante una crisis. ¿Cómo puede comprenderse que el país que había sido expuesto ante el mundo como su “mejor alumno”, poco después enfrentara una oposición tan cerrada?

Los análisis que abordaron este interrogante pueden dividirse en dos grupos en función de la hipótesis sostenida. Para los primeros, entre los cuales se encuentran los del propio FMI (IMF, 2003a), la dureza del organismo expresaba su hartazgo frente a los reiterados incumplimientos de las condicionalidades pautadas en los acuerdos. Según esta interpretación la crisis era resultado -en parte- de la excesiva tolerancia mostrada por el Fondo en los años previos al estallido de la crisis, por lo cual al desplegar una posición intransigente buscaba presionar a la Argentina a que implementara los ajustes considerados inevitables para equilibrar su economía y salir de la crisis sin financiamiento externo adicional. Así, la dureza del Fondo no expresaba

¹ Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con sede en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Investigador Asociado del Área de Relaciones Internacionales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – Argentina. E-mail: pablonemina@yahoo.com.ar

más que un reajuste necesario y demorado de su posición frente al país (Mussa, 2002; Onno de Beaufort Wijnholds, 2003; y Allen, 2003).

Por otra parte, los trabajos del segundo grupo argumentan que fue el resultado del cambio en el paradigma que orientaba la intervención del Fondo en las crisis financieras. Por entonces el FMI enfrentaba críticas tanto de los sectores progresistas, que apuntaban a su excesiva intromisión en el proceso de toma de decisiones local (Stiglitz, 2002), como de los conservadores y varias potencias centrales, entre ellas los EE.UU., quienes consideraban que los paquetes de salvataje financiero, tal como habían sido otorgados en la crisis de México en 1994, y en las de Rusia y el Sudeste Asiático en 1997/8, servían para fomentar el endeudamiento irresponsable de los países y las malas políticas de crédito de los acreedores privados, quienes prestaban en función de las elevadas tasas sin evaluar el alto riesgo de incobrabilidad, aumentando el llamado riesgo moral² (Meltzer, 1998). De este modo, el organismo disminuyó y endureció las condicionalidades incluidas en los acuerdos privilegiando las acciones previas (las condiciones más duras en tanto deben cumplirse antes de continuar las negociaciones), al tiempo que alentó la reducción de su financiamiento para promover el “autocontrol” por parte de los países y el sector financiero. Según este enfoque, la dureza del Fondo respondía a un cambio que afectaba su posicionamiento frente a todos países que solicitaban su asistencia (Graham and Masson, 2002; Khor, 2002).

Si bien es cierto que la Argentina no tuvo un desempeño excepcional en lo que refiere a las condicionalidades incluidas en los acuerdos previos a la caída del régimen de convertibilidad³, mostraba un nivel de cumplimiento superior al promedio. En efecto, mientras que el nivel de cumplimiento promedio está muy por debajo del 50% (Dreher, 2009: 249), Argentina había cumplido el 51% y el 77% de las condicionalidades cuantitativas y estructurales respectivamente establecidas entre 1998 y 2001. Más aún,

² Basado en la racionalidad instrumental individual, refiere a la idea de que la mera existencia de un seguro aumenta la posibilidad de que ocurra el evento respecto del cual se establece el aseguramiento, ya que se reduce el incentivo para que el asegurado tome las acciones preventivas necesarias.

³ Por ejemplo, desde 1994 se habían incumplido sistemáticamente las metas fiscales acordadas (Allen, 2003: 135).

durante la gestión de Duhalde el país aumentó la tasa de cumplimiento de las medidas reclamadas por el organismo (Autor, 2011a: 279).

Por otra parte, aunque el Fondo aumentó el número de acciones previas incluidas en sus programas⁴, durante 2002 otorgó créditos por casi 35 mil millones de dólares, incluyendo salvatajes a Turquía, Brasil y Uruguay para evitar una cesación de pagos por el contagio de la crisis argentina. Pero en ese mismo año la Argentina no sólo no recibió asistencia del organismo sino que realizó pagos netos por 1.420 millones de dólares, evidenciando que el comportamiento del Fondo frente a nuestro país estuvo lejos de formar parte de un cambio general en sus criterios de manejo de las crisis (Autor, 2011a: 190 y ss.).

Las consideraciones previas ponen de manifiesto que el FMI mostró más dureza, a pesar de que la Argentina mejoró su disposición a cumplir las medidas reclamadas. En este sentido, la disposición colaborativa del Gobierno amplió irónicamente el margen para que el organismo condicionara su ayuda al cumplimiento de diversas medidas ortodoxas que profundizaron el impacto recesivo de la crisis (Ferrer, 2003: 23-29). Así, la conflictividad de la relación entre el FMI y los Gobiernos aparece como el resultado contingente de las estrategias implementadas en las negociaciones, menos que un supuesto dado de antemano (Stiles, 1991; Woods, 2006).

¿Por qué el FMI desplegó una estrategia confrontativa, a pesar que el Gobierno cumplió con gran parte de las medidas exigidas? ¿Por qué la cooperación del Gobierno sólo contribuyó a generar una situación de dominación por parte del organismo? ¿Qué factores permitieron cambiar la lógica de la relación?. Apoyado en la metodología cualitativa, el presente trabajo aborda estos interrogantes a partir de un estudio de caso sobre las negociaciones por la suscripción del acuerdo *Stand-by* entre el FMI y el Gobierno argentino, durante la etapa más intensa de la crisis económica que estalló a finales de 2001. El trabajo se divide en cuatro secciones. En las dos primeras se analizan en detalle las vicisitudes de cada etapa de negociación. Allí se caracterizan las estrategias desplegadas por cada negociador y los factores que las condicionaron. En la

⁴ De un promedio de media acción previa por programa durante 1987-90, se pasó a un promedio de más de cinco en el período 1997-2000 (IMF, 2002a: 29).

tercera se estudian las condiciones que hicieron posible alcanzar el acuerdo y dar un cierre a la larga negociación. Se cierra el artículo con un apartado de reflexiones finales.

PRIMERA ETAPA: DOMINACIÓN DEL FMI

A comienzos de 2002 la Argentina estaba sumida en una profunda crisis económica y social. El país ingresaba al cuarto año consecutivo de caída del PBI⁵, había declarado la cesación de pagos sobre más de 80 mil millones de dólares de deuda pública, y sufría una profunda desconfianza sobre la estabilidad de la moneda nacional. Por su parte, el desempleo afectaba a casi una quinta parte de la población, y la pobreza y la indigencia ascendían al 40% y al 13% respectivamente (estas cifras llegaron casi al 60% y al 25% a mediados de ese año)⁶.

El régimen de convertibilidad con tipo de cambio fijo 1 a 1 vigente durante la década anterior había permitido la libre circulación interna de dólares y el establecimiento de depósitos y préstamos en moneda extranjera, posibilitando la creación secundaria de dólares por parte de los bancos comerciales, sin el necesario respaldo en divisas. La inminente devaluación dispararían un conflicto decisivo entre los actores que pugnaban por obtener la mayor cantidad de dólares físicos por sus activos denominados en dólares, en tanto el Banco Central no disponía (ni podía disponer) de reservas suficientes para satisfacer esa demanda. En efecto, el *stock* de 44 mil millones de dólares de depósitos del sector privado a fines de 2001 triplicaba el total de reservas, que por entonces sumaban 15 mil millones de dólares⁷. La principal disputa se dio entre los ahorristas, quienes tenían congelados sus depósitos en dólares⁸, y los bancos, que ostentaban una nómina de préstamos otorgados en esa misma moneda. Si el sector bancario debía recortar sus expectativas sobre la posibilidad de recobrar en divisas esos activos, habida cuenta que -a excepción de los exportadores- sus deudores

⁵ Entre 1999 y 2002 el producto tuvo una contracción acumulada del 19.48% (datos del MECON).

⁶ Datos del INDEC.

⁷ Datos del MECON.

⁸ Ante la corrida bancaria por la expectativa de devaluación y el consiguiente descenso de las reservas, a finales de 2001 la gestión anterior de De la Rúa instauró una restricción al retiro de depósitos vulgarmente conocida como “corralito”, con el fin de evitar la quiebra del sistema bancario.

tenían ingresos en pesos devaluados, los ahorristas también deberían afrontar una pérdida de su poder adquisitivo.

Poco después de asumir al frente del Ejecutivo, Duhalde anunció un programa económico orientado a reactivar la producción y evitar la hiperinflación, cuyas principales medidas fueron: a) devaluar la moneda y establecer un mercado de cambios dual, uno comercial a 1.40 pesos por dólar para alentar las exportaciones, y otro libre, pero de flotación administrada, para limitar la especulación financiera; b) establecer controles de cambio para contener la salida de divisas; c) pesificar asimétricamente los depósitos y los créditos bancarios pautados originalmente en dólares, reconociendo 1.40 pesos por cada dólar depositado y un peso por cada dólar recibido de préstamo⁹, más la indexación en base a la inflación minorista para ambos; d) posponer por un año la devolución de los depósitos bancarios atrapados¹⁰; e) implementar una política monetaria y fiscal ortodoxa para contener la inflación, aunque ampliando los planes sociales como herramienta de contención social¹¹ y f) congelar las tarifas de los servicios públicos¹² (Remes Lenicov, Todesca y Ratti, 2002; Duhalde, 2007).

Junto a esos anuncios el Gobierno resaltó la necesidad de suscribir un acuerdo con el FMI que incluyera financiamiento por entre 15 y 20 mil millones de dólares, con el fin de aumentar la oferta de dólares para contener las expectativas de devaluación y resolver con mayor margen los conflictos derivados de la pesificación asimétrica. Asimismo, era importante en términos políticos porque -siempre según el Gobierno- un conflicto con el FMI era el camino al aislamiento internacional (Amadeo, 2003: 55,

⁹ Inicialmente se procuró pesificar a 1.40 pesos por dólar los préstamos superiores a 100 mil dólares, los cuales en su mayoría correspondían a las grandes empresas. Pero la fuerte presión del sector empresario llevó a extender la pesificación 1 a 1 al total de 36.500 millones de dólares de créditos vigentes en el sistema financiero (datos del BCRA). Esto implicó una licuación de pasivos para todos los deudores, en particular para las grandes empresas locales, algunas de las cuales tenían ingresos en divisas o activos en el extranjero.

¹⁰ Los depósitos en cuenta corriente superiores a 10 mil dólares y aquellos en caja de ahorro por encima de 3 mil dólares fueron convertidos a plazo fijo y reprogramados.

¹¹ Con los recursos derivados del 20% de derechos de exportación a los productos agropecuarios, el Gobierno estableció una ayuda de 150 pesos (por entonces unos 50 dólares) a las jefas y los jefes de hogar desocupados a cambio de una contraprestación laboral. El plan llegó a abarcar a casi dos millones de personas y fue clave para morigerar el deterioro de las condiciones sociales.

¹² También se introdujeron medidas adicionales para proteger el empleo como la doble indemnización por despido.

Duhalde, 2007: 294). La fragilidad del contexto económico junto a los limitados apoyos locales -los sectores productivos y los sindicatos, además del gobernante Partido Justicialista- e internacionales -el Banco Interamericano de Desarrollo y los Gobiernos de Brasil, España y Chile-, motivaron que el Gobierno desplegara una estrategia marcadamente cooperativa en la negociación con el organismo, caracterizada por una alta disposición a aceptar e implementar las demandas del organismo¹³.

No obstante, el Gobierno chocó contra una posición marcadamente confrontativa del FMI, caracterizada por una muy baja disposición a otorgar concesiones y el condicionamiento de la entrega de financiamiento a la implementación de un típico ajuste ortodoxo centrado en la obtención de un superávit fiscal y comercial, en línea con los reclamos de los acreedores, las empresas extranjeras concesionarias de los servicios públicos privatizados y el sector bancario. La estrategia confrontativa del Fondo expresaba una posición negociadora muy fuerte, resultante del apoyo de muchos de los actores dominantes del plano internacional. Algunos lo hicieron porque buscaban convertir el manejo de la crisis argentina en un ejemplo para cambiar las expectativas de los inversores financieros sobre los rescates (EE.UU.¹⁴); otros se hicieron eco de los reclamos de los bonistas e instituciones financieras afectadas por el *default* (Italia y Japón, principalmente); y un tercer grupo promovió la demanda de las empresas concesionarias de servicios públicos privatizados afectadas por la devaluación y el congelamiento de tarifas (Francia y España¹⁵).

¹³ Se entiende por estrategias a las acciones de los negociadores orientadas a modificar la posición del adversario en función de sus objetivos, en el marco del contexto de los medios necesarios para conseguirlos (Crouch, cit en Crow, 1989). La orientación de las estrategias, que puede ser confrontativa o cooperativa, depende del paradigma a partir del cual el Fondo y el Gobierno ajustan su comportamiento, que puede ser de regateo (*bargaining*) o de solución de problemas (*problem solving*). En el primero se concibe a la negociación como un “tironeo” en la cual el beneficio de uno implica la pérdida de otro; en el segundo se buscan consensos a partir de los intereses comunes, alentando la búsqueda de una solución que deje satisfechos a ambos. Así, las negociaciones entre el FMI y el Gobierno pueden ser conflictivas o cordiales dependiendo de si los negociadores implementan estrategias confrontativas o cooperativas respectivamente. Si una parte coopera y otra confronta, tal como sucedió entre la Argentina y el FMI durante gran parte de 2002, se establece una dominación de la segunda sobre la primera. Ver Autor (2011a) para un desarrollo del marco conceptual, o Autor (2011b) para una versión abreviada.

¹⁴ Además debe resaltarse que Argentina representaba sólo el 0.7% del total de las exportaciones de EE.UU., y sólo el 9% de la deuda en *default* estaba en manos de acreedores de ese país (Bruno, 2004).

¹⁵ A fines de los '90, el *ranking* de *stock* de inversión extranjera en empresas privatizadas estaba liderado por EE.UU. y España, seguidos de Chile, Francia, Italia y Gran Bretaña (Kulfas, Porta y Ramos, 2002:

Con todo, el Fondo no podía desentenderse de lo que sucedía en un país cuya política económica había estado bajo su supervisión ininterrumpida durante trece años. Por ello, su inflexibilidad servía, además, al doble propósito de redimirse de sus errores previos, y mostrarse ante la comunidad internacional como una institución que todavía podía ser garante del comportamiento económico “responsable” de los países en desarrollo (Corrales, 2002).

Ante el pedido del Gobierno, el Fondo se limitó a condicionar el inicio de las negociaciones a la implementación de una serie de medidas: a) unificar y liberalizar el régimen cambiario, b) reestructurar el sistema bancario, c) implementar un fuerte ajuste fiscal a nivel nacional y provincial¹⁶ y garantizar una política monetaria restrictiva que mantuviera baja la inflación, y d) subir las tarifas de los servicios públicos (Amadeo, 2003: 77-80, IMF, 2002b, Labaqui, 2011). Asimismo, puso a cargo de las negociaciones a Anoop Singh, un funcionario de confianza de la Gerencia¹⁷ que compartía la confrontatividad hacia el país (Loser, cit. en Tenenbaum, 2004: 41-251).

Demostrando su disposición a implementar los compromisos asumidos, en muy poco tiempo el Gobierno cumplió gran parte de las medidas reclamadas. Sin embargo, el Fondo subestimó los logros e incorporó nuevas exigencias: a) suspender la intervención en el mercado de cambios unificado para contener el precio del dólar (que por entonces ya cotizaba a 2.50 pesos), dado que –aseguraba– implicaba dilapidar las exiguas reservas, b) canjear compulsivamente los depósitos atrapados en los bancos por un bono en dólares a diez años, con el doble fin de ayudar a reducir la presión sobre el dólar y eliminar el riesgo de quiebra que pesaba sobre el sistema bancario, c) compensar a los bancos por los efectos sobre los balances de la pesificación asimétrica y el descalce cambiario¹⁸, y d) modificar la ley de quiebras y derogar la ley de subversión

124). No obstante, fueron los países europeos los que ejercieron mayor presión sobre el Gobierno para que otorgara compensaciones a estas compañías (Azpiazu, 2005).

¹⁶ Éste requería, entre otras medidas, despedir 400 mil empleados públicos (La Nación, 11/1/02).

¹⁷ La Gerencia está compuesta por el director gerente y tres vicedirectores. No obstante, en las negociaciones con los países de cierta relevancia participan sólo el director y el primer vicedirector (designado por los EE.UU.).

¹⁸ Durante la crisis de 2002 los bancos fueron afectados por la pesificación asimétrica de los créditos y depósitos en moneda extranjera (la diferencia entre la pesificación de pasivos a 1.40 pesos por cada dólar y de activos a 1 peso por dólar) y el descalce cambiario entre activos pesificados (créditos otorgados

económica (Amadeo, 2003, Labaqui, 2011, Clarín, 18/3/02). El cuadro 1 presenta un detalle de las medidas exigidas por el FMI a lo largo de 2002, y su cumplimiento por parte del Gobierno. El mismo busca reflejar con claridad la manifestación concreta de uno de los principales indicadores de la estrategia confrontativa del organismo.

Cuadro 1: Principales medidas exigidas por el FMI durante la negociación por el acuerdo *Stand-by* en 2002. Detalle por etapa de aparición y cumplimiento.

1ª etapa (enero-abril de 2002)		2ª etapa (mayo-noviembre de 2002)	
Condicionalidades	Cumplimiento	Condicionalidades	Cumplimiento
Unificar y liberalizar el régimen cambiario	Unificado, no liberalizado	Ampliar la autonomía del BCRA	Cumplida: Se modificó la ley de entidades financieras
Reestructurar el sistema bancario: - Canje compulsivo de depósitos por bonos - Compensaciones a bancos por pesificación asimétrica y descalce cambiario - Congelar o compensar a bancos por amparos	- Se realizaron diversos canjes graduales durante 2002 - Se otorgaron compensaciones por pesificación durante 2002 - Se compensaron pérdidas por amparos a largo plazo	Garantizar un superávit primario de 2.5% del PBI para 2003 y 4 a 5% a mediano plazo	- Superávit primario de 2.5% del PBI para 2003 - Se pospuso la definición del superávit a mediano plazo
Superávit del 1% del PBI en Nación y reducir el déficit un 60% en las provincias	Cumplida	Garantizar consenso doméstico	/1

originalmente en dólares) y pasivos mantenidos en dólares (préstamos en divisas tomados en el exterior que no podían pesificarse). El Estado otorgó compensaciones en la forma de títulos públicos por 8.300 millones de dólares por esos conceptos (Cobe, 2009: 107-109).

Revisar los contratos de concesión de las empresas privatizadas y subir las tarifas de los servicios públicos entre 20 y 30%	- Se aumentó la electricidad un 9% y el gas un 7% a finales de 2002, pero fueron congelados por la Justicia. - Se pospuso la revisión de contratos	Garantizar un superávit primario en las provincias para 2003	Cumplida: Se estableció un superávit primario de 0.4% del PBI para las provincias en 2003
Encontrar un régimen de política monetaria que mantenga baja la inflación	Cumplida		
Aprobar el presupuesto 2002	Cumplida		
Eliminar las cuasimonedas (bonos provinciales)	Cumplida		
Eliminar los planes de competitividad (exenciones impositivas a diversos sectores económicos)	Cumplida		
Modificar las leyes de quiebra y subversión económica	Cumplida en 2ª etapa		
Establecer un ancla monetaria y un régimen de metas de inflación	No cumplida		

/1 Debido al carácter vago de la condicionalidad, no es posible determinar su cumplimiento.

Fuente: elaboración propia en base Amadeo (2003), Bembi y Autor (2007), Bonelli (2004), Duhalde (2007), IMF (2003b), Labaqui (2011), Remes Lenicov, Todesca y Ratti (2002), IMF News Briefs y Press Releases, y Diarios Clarín, La Nación y Página 12, todos de 2002.

El entonces Ministro de Economía Remes Lenicov reflejó con una metáfora futbolística la desazón del Gobierno frente al comportamiento del FMI: “*cuando entramos al área para hacer el gol, los del Fondo siempre nos corren el arco y la línea de fondo*” (Clarín, 10/3/02). Por otra parte, la percepción respecto a que la extrema cooperación del Gobierno sólo servía para reforzar la posición confrontativa del Fondo,

llevó a un aumento de los conflictos del Gobierno en el plano doméstico, y también al interior del Ejecutivo.

El equipo económico reclamó avanzar con los pedidos del Fondo, en especial el canje compulsivo de depósitos por bonos (La Nación, 23/3/02, 16/4/02), pero encontró una fuerte oposición por parte del Congreso, los gobernadores oficialistas y el propio presidente. En ese marco el ministro renunció, y luego de un período de fuerte incertidumbre sobre el rumbo económico, fue reemplazado por Lavagna, un economista heterodoxo pero moderado. Éste reflejaba el consenso alcanzado entre la mayoría de los gobernadores y el presidente, tendiente a ratificar el interés por obtener apoyo y financiamiento externo, aunque procurando obtener mayores márgenes de autonomía en la negociación con el Fondo (Amadeo, 2003, Duhalde, 2007).

SEGUNDA ETAPA: ALTA CONFRONTACIÓN

A partir de la asunción de Lavagna, el Gobierno procuró romper el círculo vicioso planteado por el Fondo, caracterizado por el establecimiento de nuevas precondiciones a medida que las anteriores eran cumplidas. Para ello se basó en dos preceptos: primero, establecer preferencias de política económica menos ambiciosas pero con posibilidades reales de ser implementadas; segundo, manifestar –dentro de lo posible- una menor receptividad a las propuestas del Fondo.

En este sentido, el Gobierno avanzó con la modificación a la ley de quiebras y la derogación de la ley de subversión económica¹⁹, a condición de iniciar luego la negociación por el borrador del acuerdo. Para facilitar la consolidación de este escenario, dejó de lado la exigencia de recibir fondos frescos y se limitó a pedir la refinanciación de más de 5 mil millones de dólares de vencimientos hasta el final de

¹⁹ Respondiendo a los reclamos del sector productivo, luego de la devaluación el Congreso modificó la ley de quiebras para establecer una serie de protecciones a los deudores, en especial, la suspensión por un año de las quiebras y la restricción a que el acreedor pudiera quedarse con los activos de los deudores (proceso denominado *crown down*). El FMI exigió eliminar esos cambios, con el fin de favorecer la recuperación de activos por parte del sector financiero (Todesca, 2006). Por su parte, la ley de subversión económica había sido sancionada en la década del '70 con el fin de controlar el financiamiento a las organizaciones armadas; pero ahora proveía una plataforma para condenar el accionar de algunos banqueros durante el final de la convertibilidad. La preocupación del sector financiero aumentó luego de que la Justicia comenzara a librar citaciones, por lo cual reclamó al FMI que exigiera al Gobierno la derogación de esta ley, de la cual el Fondo no estaba advertido hasta entonces.

2003. Por otra parte, lanzó un canje voluntario de depósitos congelados por bonos, el cual tuvo una modesta aceptación del 20%²⁰. Sin embargo, el Fondo envió una nueva misión que estableció nuevas demandas: suspender la intervención en el mercado de cambios para contener la cotización del peso, implementar el canje compulsivo de depósitos atrapados por un bono, aumentar las tarifas de los servicios públicos, y establecer un ancla monetaria (La Nación, 19/6/02, Labaqui, 2011).

¿Cuál era la lógica política de estas medidas económicas? El Fondo privilegiaba tres objetivos: cuidar las reservas con el fin de favorecer la realización de una oferta más conveniente a los acreedores en la futura reestructuración de deuda, mejorar la rentabilidad de las empresas extranjeras concesionarias de servicios públicos, y transferir al Estado el costo de la resolución del problema de los depósitos congelados, para mejorar la solvencia del sector bancario. De este modo, acreedores, bancos y empresas concesionarias de servicios públicos se verían beneficiados por una transferencia de recursos desde el Estado, a costa de los asalariados y el sector de bienes no transables, que sufrirían por la disminución del salario real y la menor demanda agregada respectivamente.

Por su parte, el Gobierno rechazaba todas las medidas. Se negaba a suspender la intervención en el mercado cambiario, en tanto le permitía mantener un relativo control sobre la cotización del dólar y, por ende, poner un freno a la inflación. Respecto del sector bancario, mantenía el enfoque de combinar canjes voluntarios en lugar de uno compulsivo, dado que ello implicaría asumir un alto costo político. Finalmente, no estaba dispuesto a convalidar aumentos de tarifas en el corto plazo (Autor, 2011a).

En el marco de una visita a la región a comienzos de agosto, el secretario del Tesoro de EE.UU. se reunió con Duhalde y manifestó su visto bueno a la propuesta de salida gradual del “corralito” mediante canjes sucesivos y la suscripción del acuerdo con el FMI (Amadeo, 2003: 227). Apoyado en este respaldo, el Gobierno dio por concluida

²⁰ El canje permitió a los tenedores de depósitos reprogramados canjearlos total o parcialmente por títulos de deuda del Estado en pesos o en dólares, a 5 o 10 diez años, dependiendo de la moneda en la que originalmente habían sido pactados.

la fase de negociaciones preliminares y envió al FMI el primer borrador de la carta de intención, afirmando su posición sobre los temas más conflictivos (La Nación, 8/8/02).

Varios elementos contribuyeron a que el Gobierno adoptara una mayor iniciativa. Además del apoyo estadounidense, la posición negociadora se vio reforzada por una mejora en las condiciones económicas locales a partir del segundo semestre. Por entonces, las variables fiscales mostraron una mejora por el efecto combinado del impacto de la inflación sobre la recaudación y la contención del gasto. Asimismo, el crecimiento del sector exportador y las mejores expectativas económicas alentaron una estabilización del sector externo y financiero, reflejada en la caída de la cotización del dólar (de alcanzar casi 4 pesos había disminuido a 3.50) y el freno a la disminución de las reservas.

Por otra parte, el empeoramiento de la crisis en Uruguay y en Brasil²¹, que motivó la aprobación de créditos del Fondo por 2.800 y 30.000 millones de dólares respectivamente, reforzó la posición negociadora del Gobierno en el plano internacional, en tanto se hizo evidente que la demora del FMI en suscribir el acuerdo contribuía a deteriorar las condiciones económicas regionales.

Lo anterior pone de manifiesto que la intervención del Fondo en la crisis argentina fue menos el reflejo de un nuevo paradigma para su política de manejo de las crisis financieras, que un caso excepcional por lo inédito de la dureza desplegada. En efecto, durante 2002 el FMI aumentó sus desembolsos respecto del año anterior, destacando los salvatajes otorgados a Turquía, Brasil y Uruguay para evitar una cesación de pagos por el contagio de la crisis argentina (ver cuadro 2). Como es sabido, Turquía era un importante aliado de los EE.UU. en la OTAN; mientras que Brasil, además de representar exportaciones para EE.UU. un 150% mayor que las de Argentina²², era un país cuya crisis podría tener efectos desestabilizadores sistémicos por su extensión, población y liderazgo en América del Sur (Corrales, 2002: 36).

²¹ Entre marzo y julio de 2002 el riesgo financiero en Brasil y Uruguay medido por el EMBI+ y el *Uruguay Bond Index* aumentó 221% y 312% respectivamente (ver *Ambitoweb.com*).

²² Datos a 2001 del *Bureau of Economic Analysis*, <http://www.bea.gov/>

Cuadro 2: Flujo neto de créditos del FMI. Países seleccionados y resto, en millones de dólares, años 2001 – 2002.

	2001	2002
Desembolsos	31.341	34.431
Argentina	10.392	0
Brasil	6.714	15.899
Turquía	11.317	12.861
Uruguay	0	1.635
Resto	2.918	4.036
Reembolsos	(20.684)	(23.712)
Flujo neto	10.656	10.719

Fuente: elaboración propia en base a datos del FMI.

No obstante, la Gerencia se mantuvo firme en su negativa a aprobar el acuerdo, insistiendo en la necesidad de incluir un ancla monetaria para contener la inflación, apurar el otorgamiento de compensaciones a los bancos, y, lo que ahora aparecía como la exigencia más importante, asegurar un consenso político doméstico para garantizar el cumplimiento de las condiciones incluidas en un futuro acuerdo (IMF, 2002c).

Poco después el Gobierno envió un segundo borrador de la carta de intención que parecía haber establecido una agenda de temas sobre los cuales restaban diferencias menores. En la meta de superávit primario, el Gobierno proponía una meta de 2% del PBI para 2003 y 3% para los años sucesivos, mientras que el Fondo exigía 2.5% y 4% a 5% respectivamente. Respecto de las tarifas de servicios públicos, el Gobierno aceptaba un aumento del 10%, pero el FMI pretendía una suba de entre el 20 y el 30%. Por último, el organismo insistía con el canje compulsivo de depósitos y la desintervención del mercado de cambios. El borrador recibió las críticas previsibles de la Gerencia, a las que se sumaron Alemania, Bélgica, Suiza y Reino Unido, pero fue apoyado por EE.UU. y Francia (Labaqui, 2011). Como demostración de la autonomía relativa de la que gozan las instituciones multilaterales de sus países miembros, la intransigencia del FMI generó una división dentro del bloque de potencias europeas, aun cuando éstas compartían el interés por alentar una mejora de las tarifas y reestablecer el crecimiento.

El Gobierno se mostró dispuesto a levantar paulatinamente los controles de cambio y avanzar con el ajuste en las tarifas; sin embargo, el Fondo incluyó una nueva demanda en la agenda referida a garantizar un superávit fiscal en las provincias durante 2003, en lugar de la meta de equilibrio que estaba pautada (Amadeo, 2003: 294). Ante la sorpresa, el Gobierno desplegó por primera vez una estrategia marcadamente confrontativa: argumentando que el nivel de reservas era muy bajo (por entonces alcanzaban poco más de 9 mil millones de dólares), suspendería los pagos de vencimientos con los organismos multilaterales hasta tanto no tuviera certeza de que esos fondos serían compensados. Poco después, no abonó un vencimiento de 800 millones de dólares con el Banco Mundial²³. Esto marcó un hito en la negociación, dado que alertó a las potencias respecto de los riesgos que conllevaba la intransigencia del FMI para la estabilidad del sistema internacional; en última instancia, una cesación de pagos con el FMI o el Banco Mundial causaría un mayor perjuicio financiero a las potencias centrales, en su carácter de principales aportantes al organismo.

ACUERDO Y FINAL DEL JUEGO

Poco después, el Gobierno retomó su estrategia cooperativa. Primero, atendiendo a los reclamos del Fondo de fomentar el consenso, acordó un documento con veinte de los veinticuatro gobernadores por el cual todos se comprometían a avanzar en algunas de las medidas exigidas por el FMI (La Nación, 18/11/02). Segundo, anunció un aumento del 9% en las tarifas eléctricas y el 7% en las de gas, a cambio de asegurarse el apoyo decisivo de España, Francia, Italia y Alemania, lugar de origen de las casas matrices de las compañías concesionarias de gran parte de los servicios públicos privatizados (La Nación, 20-22/11/02). Tercero, la flexibilización de las restricciones a la operatoria en cuentas bancarias eliminó otro tema conflictivo de la agenda. Finalmente, la asunción de Prat-Gay al frente del Banco Central, un ex

²³ La decisión reflejó cierta voluntad cooperativa, dado que el Gobierno incumplió el pago de 725 millones de dólares correspondientes al capital, pero abonó 79 millones de intereses. Esto evitó declarar un *default* formal con el Banco Mundial, y en cambio abrió un proceso de revisión en ese organismo cuya conclusión podía demorarse hasta seis meses, dejando abierta la puerta para avanzar en la negociación con el FMI (Bonelli, 2004: 278).

funcionario de *JP Morgan* con nutridos contactos en la comunidad financiera internacional, contribuyó a que disminuyeran los reclamos del FMI por otorgarle mayor autonomía a esa institución (Labaqui, 2011).

Durante diciembre hubo varias reuniones en el Directorio para tratar el caso argentino²⁴. A pesar de enfrentar la oposición del G7, la Gerencia mantuvo su intransigencia hacia nuestro país, criticando la falta de consenso político que deterioraba el control del Gobierno sobre el programa económico y la adopción de medidas sin consultar previamente al organismo o incluso contra su opinión (como el enfoque gradual adoptado para tratar los depósitos bancarios congelados (IMF, 2002d: 13)). Aunque reconoció algunos logros, insistió sobre las tareas pendientes: establecer un ancla monetaria, ratificar el compromiso sobre el superávit primario consolidado del 2.5% del PBI para 2003 y confirmar aumentos generales de tarifas en los servicios públicos (Íbid.).

El Gobierno rebatió todas las críticas de manera pormenorizada, resaltando que tenía completo control del programa económico y se felicitaba por su contribución a la estabilización de la economía. Frente al reclamo de mejorar la rentabilidad de las compañías concesionarias de los servicios públicos, planteó que no debía olvidarse que estas firmas habían disfrutado de un período extendido de beneficios extraordinarios basados en la estructura monopólica u oligopólica del mercado, y la posibilidad contemplada en los contratos de concesión de ajustar las tarifas por la inflación de los EE.UU. (Ministerio de Economía, 2003, ver también Azpiazu, 2005).

El Directorio rechazó la posición de la Gerencia y requirió continuar las negociaciones. Para facilitar la suscripción del acuerdo, se convino que incluyera algunas medidas estructurales de corto plazo y pautas cuantitativas básicas para asegurar una transición sin cambios bruscos entre la administración Duhalde y la que la siguiera. La discusión sobre las metas cuantitativas y las reformas estructurales de largo

²⁴ El Directorio está integrado por 24 directores que representan a los 188 países miembros, y el director gerente, quien preside las reuniones y cuenta con voz, pero no con voto. En esta instancia los países centrales ostentan mayor poder de decisión, ya que poseen la mayoría de los votos (EE.UU. posee casi el 17%; lo siguen Japón con el 6%, Alemania con el 5.8% y Francia y el Reino Unido con 4.8% cada uno. Argentina ostenta el 1%).

plazo (entre ellas la reestructuración de la deuda en *default*) quedaría para la negociación por el acuerdo siguiente, que tendría una duración más extensa.

Finalmente, en enero de 2003 el Directorio aprobó un acuerdo *Stand-by* transitorio de ocho meses, poniendo fin a más de un año de intensas negociaciones. Se estableció un esquema de financiamiento “flujo cero”, el cual garantizó que el programa no involucrara financiamiento neto positivo del Fondo, sino que sus desembolsos sólo cubrieran los vencimientos de capital, debiendo la Argentina cancelar los intereses. Esto evitó al Gobierno afrontar pagos netos por unos 3 mil millones de dólares que vencían hasta fines de agosto. Las medidas incluidas estaban orientadas a tres objetivos: avanzar en la revisión del marco regulatorio del sistema bancario; asegurar el respeto de los derechos adquiridos de los acreedores externos e internos; y garantizar el cumplimiento de la meta de superávit fiscal consolidado de 2.5% del PBI (2.1% por parte de la Nación y 0.4% por las provincias). La presencia de este último punto, que fue el disparador del *default* temporal del Gobierno con el Banco Mundial, hace suponer que se trató de una concesión inevitable ante los principales accionistas del Fondo para lograr su patrocinio.

Aunque contó con el apoyo del G7, la ratificación del programa enfrentó la oposición del *staff*, la Gerencia y los directores por Suiza, Australia, Holanda, los países nórdicos y Bélgica, cuyos votos combinados totalizaban el 19.6% del total, quienes se abstuvieron en la votación²⁵. Los técnicos resaltaron que el programa contenía medidas insuficientes para reestablecer las sostenibilidad en el mediano plazo y, por ende, no proporcionaba una base para evaluar si Argentina tendría la capacidad de pagar sus compromisos con el Fondo o reestructurar la deuda de forma razonable con los acreedores (IMF, 2003b: 9). Además, destacaron la existencia de riesgos tales como un exceso de gastos en las provincias, la aprobación de nuevas iniciativas de gastos por parte del Congreso y las presiones salariales (Ibíd.: 11). Por su parte, Köhler, en representación de la Gerencia, insistió con la importancia de generar consenso político para garantizar el cumplimiento de las medidas incluidas; así, señaló que la recomendación de aprobación del acuerdo debía tomarse como una demostración de

²⁵ Como es sabido, la abstención es la manera tradicional -y excepcional- de manifestar desacuerdos en el Directorio Ejecutivo del FMI.

buena fe que la comunidad financiera hacía por la Argentina²⁶ (IMF, 2003e). Por último, los países que se abstuvieron criticaron que seguía pendiente la resolución de las brechas externas y fiscales, que el programa reducía los incentivos para llevar a cabo las reformas estructurales de mediano plazo, y que su elaboración se había hecho bajo la presión de que Argentina podía caer en *default* con el Fondo (Costello, 2003: 4).

Una agenda relativamente limitada de condicionalidades, la continua mejora de los indicadores económicos (ver cuadro 3) y la implementación de una estrategia cooperativa por parte del Gobierno caracterizada por una alta disposición a cumplir los compromisos asumidos, determinaron que las negociaciones sucesivas relativas al acuerdo transitorio atravesaran sin sobresaltos. Por otra parte, ya se vislumbraban los tres pilares sobre los cuales se apoyaba el modelo de la posconvertibilidad: a) tipo de cambio competitivo, para alentar las exportaciones y la producción vía sustitución de importaciones; b) superávit comercial, orientado a recomponer las reservas, reducir la dependencia del endeudamiento externo y limitar la exposición a los *shocks* externos; y c) superávit fiscal, para contribuir a la disminución del endeudamiento como fuente de financiamiento y reducir la presión inflacionaria. A su vez, estos pilares estaban relacionados entre sí. El tipo de cambio competitivo promovía el superávit comercial, el cual facilitaba la obtención de un excedente de divisas; el superávit fiscal, por su parte, proporcionaba recursos genuinos para adquirir esas divisas, lo cual permitía engrosar las reservas y sostener la cotización del peso (Rapetti, 2005, CENDA; 2010).

Cuadro 3: Argentina. Principales indicadores económicos y sociales, 2001-2003. Datos al final del período excepto indicación contraria.

	2001	2002	2003
Variación PBI	-4.41%	-10.89%	8.84%
Inflación (IPC)	-1.5%	40.9%	3.7%
Ar\$ por USD	1	3.36	2.93
Reservas ¹	15.318	10.420	13.820
Saldo primario consolidado / PBI	-0.93%	0.67%	3.17%

²⁶ El director gerente del FMI manifestó que se sintió “obligado” a dar el visto bueno al acuerdo (Loser, cit. en Tenenbaum, 2004: 255).

Saldo financiero consolidado / PBI	-5.62%	-1.98%	0.85%
Saldo cta. cte. / PBI	-1.41%	9.43%	6.35%
Saldo cta. capital / PBI	-2.03%	-12.27%	-2.47%
Flujo neto con FMI ¹	8.796	-1.420	-794
Pobreza ²	38.3%	57.5%	47.8%
Desempleo ²	17.33%	24.26%	22.4%

¹ en millones de dólares; ² segundo semestre.

Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA, MECON, INDEC y FMI.

REFLEXIONES FINALES

Pueden identificarse dos grandes períodos en las negociaciones entre el Fondo y el Gobierno argentino durante la gestión de Duhalde. El primero se extiende desde la asunción de Duhalde hasta la renuncia de Remes Lenicov al frente de Economía hacia finales de abril de 2002. Reflejando una débil posición negociadora, el Gobierno desplegó una estrategia cooperativa para convencer al Fondo de la necesidad de recibir apoyo; pero la intransigencia del organismo, motivada por una robusta posición negociadora fundamentada en el apoyo del G7 y los sectores financieros, permitió consolidar una situación de dominación, mediante la cual el Fondo logró imponer gran parte de las medidas exigidas y el Gobierno erosionó progresivamente su débil base de apoyo doméstica.

El reemplazo de Remes por Lavagna en Economía, motivado por las diferencias del primero con el enfoque de negociación propuesto, supuso el inicio de la segunda etapa. Desde entonces, el Ejecutivo y los gobernadores establecieron una serie de puntos comunes para dar certidumbre a la economía y limitar las opciones de política disponibles. Esto se reflejó en una menor receptividad a las demandas del Fondo, la cual, sumada a una recomposición en la posición negociadora alentada por la progresiva mejora de las variables económicas y el apoyo de varias potencias centrales (entre ellas los EE.UU.), motivó que el Gobierno desplegara sucesivamente una estrategia más confrontativa. Dado que el Fondo mantuvo su intransigencia, la negociación mantuvo su alta conflictividad, aunque con algunas diferencias. En especial, el Gobierno se corrió

de su posición meramente defensiva, al tiempo que logró incidir decisivamente sobre la agenda de negociación evitando implementar algunas de las exigencias del Fondo o logrando alcanzar puntos intermedios. Progresivamente, la configuración de la negociación viró de la dominación al enfrentamiento.

Dado que el Fondo no parecía dispuesto a aprobar el acuerdo a pesar de haber cumplido gran parte de las demandas previas, el Gobierno no canceló un pago con el Banco Mundial y advirtió que no pagaría más vencimientos con los organismos multilaterales hasta tanto el FMI no se aviniera a suscribir el programa. Esta decisión alertó a las potencias centrales de los riesgos que implicaba para la estabilidad del sistema multilateral la intransigencia del FMI, por lo cual lo presionaron para que aprobara el acuerdo. Finalmente, el Fondo aprobó un acuerdo transitorio que incluyó condicionalidades de relativamente bajo nivel de exigencia. Sumado a la mejora progresiva de las condiciones económicas, se entiende que durante el período de vigencia este acuerdo la relación entrara en un *impasse*. Pocos meses después, y luego de la asunción de la presidencia por parte de Kirchner, las negociaciones volverían a tomar un cariz profundamente conflictivo, lo cual culminaría en la cancelación anticipada de la deuda con el organismo conjuntamente con Brasil a finales de 2005, para evitar enfrentar sus exigencias.

Como se ha visto, durante la etapa más intensa de la crisis el FMI desplegó frente a la Argentina una dureza excepcional, tanto por las numerosas condicionalidades exigidas, que profundizaron el impacto de la crisis, como porque se mostró mucho más cooperativo frente al resto de las economías emergentes que solicitaron sus créditos en el mismo período. La confrontatividad del Fondo, como una estrategia semejante a la del consultor fracasado, expresó, además de las presiones de las potencias centrales, su interés para desentenderse de su corresponsabilidad en la crisis.

La experiencia muestra que frente a la intransigencia del FMI, la apelación a la cooperación por parte del Gobierno para promover el interés mutuo sólo contribuyó a consolidar una situación de dominación por parte del organismo, que se aprovechó de su ventaja y estableció nuevas condiciones a medidas que las anteriores eran cumplidas. En ausencia de un cambio en la disposición del Fondo, sólo un viraje hacia la

confrontatividad permitió al Gobierno romper la lógica de dominación e influir activamente sobre la agenda de negociación. Se trata de una enseñanza nada desdeñable, en el contexto de la actual crisis financiera que está llevando a diversos países en desarrollo a recurrir a los créditos del FMI, lo cual ha reposicionado al organismo como un actor destacado en el escenario económico global.

REFERÊNCIAS

ALLEN, Mark. Some Lessons from the Argentine Crisis: A Fund Staff View. TEUNISSEN, J. and AKKERMAN, A. (eds.): **The crisis that was not prevented. Lessons for Argentina, the IMF, and Globalisation.** The Hague: Fondad, 2003. pp. 120-146.

AMADEO, Eduardo. **La salida del abismo. Memoria política de la negociación entre Duhalde y el FMI.** Argentina: Editorial Planeta, 2003.

AUTOR. La relación entre el FMI y los Gobiernos tomadores de créditos. Los procesos de negociación con la Argentina durante el estallido y la salida de la crisis de la convertibilidad (1998-2006). **Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales**, Universidad de Buenos Aires, mimeo, 2011a.

———. Estrategias de negociación del FMI y la Argentina durante el período 2003-2004. AZPIAZU, Daniel. **Las Privatizadas. Ayer, hoy y mañana**, Buenos Aires: Capital Intelectual, 2005.

BEMBI, Mariela y AUTOR. **Neoliberalismo y desendeudamiento. La relación Argentina-FMI.** Buenos Aires: Capital Intelectual, 2007.

BONELLI, Marcelo. **Un país en deuda. La Argentina y su imposible relación con el FMI**, Buenos Aires, Planeta, 2004.

BRUNO, Eugenio. **El default y la reestructuración de la deuda.** Buenos Aires: Editorial Nueva Mayoría, 2004.

CENDA. La Macroeconomía después de la convertibilidad. CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO ARGENTINO. **La anatomía del nuevo patrón de**

crecimiento y la encrucijada actual. La economía argentina en la post-Convertibilidad (2002-2010), Buenos Aires: CENDA, 2010. pp. 7-46.

COBE, Lorena. **La salida de la convertibilidad. Los bancos y la pesificación**. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2009.

CORRALES, Javier. The Politics of Argentina's Meltdown. **World Policy Journal**, vol. XIX, n° 3, 2002. pp. 29-42.

COSTELLO, Peter. **Australia and the International Financial Institutions 2002-03**. Annual Report to the Parliament, Treasurer, Commonwealth of Australia, 2003. Disponible: <<http://www.treasury.gov.au/contentitem.asp?NavId=&ContentID=754>>.

CROW, Graham. The use of the concept of 'strategy' in recent sociological literature. **Sociology**, vol. 23, n° 1, 1989. pp. 1-24.

DREHER, Axel. IMF conditionality: theory and evidence. **Public Choice**, vol. 141, n° 1, 2009. pp. 233-267.

DUHALDE, Eduardo. **Memorias del infierno. Los primeros 120 días de mi presidencia**. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 2007.

FERRER, Aldo. Argentina y el Fondo Monetario Internacional. MINSBURG, N. (coord.): **Los guardianes del dinero. Las políticas del FMI en la Argentina**. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 2003. pp.23-29.

GRAHAM, Carol and MASSON, Paul. The IMF's Dilemma in Argentina: Time for a New Approach to Lending?. **Policy Brief**, n° 111, The Brookings Institution, 2002.
INTERNATIONAL MONETARY FUND - IMF. **Lessons from the Crisis in Argentina**. Washington: IMF, 2003a.

———. Argentina-Request for Stand-By Arrangement. **IMF Staff Country Report**, 03/101, Washington: IMF, 2003b.

———. **The Modalities of Conditionality – Further Considerations**. Washington: IMF, 2002a.

———. **Transcript of a Press Briefing (Teleconference) on Argentina Anne O. Krueger**, January 11, Washington: IMF, 2002b. Disponible en: www.imf.org

———. **Transcript of a Press Conference by IMF Managing Director Horst Köhler**. September 26, Washington: IMF, 2002c. Disponible en: <www.imf.org>.

———. Argentina-Staff Report for the 2002 Article IV Consultation. **IMF Staff Country Report**, 03/226, Washington: IMF, 2002d.

———. IMF Managing Director Issues Statement on Transitional Credit Support for Argentina. **Press Release**, 03/06, January 17, Washington: IMF, 2003e.

KHOR, Martin. A critique of the IMF's role & policy conditionality. **Global Economy Series**, n° 4, 2002. Disponible en: <<http://www.twinside.org.sg/title/geseries4.htm>>.

KULFAS, Matías, PORTA, Fernando y RAMOS, Adrián. Inversión extranjera y empresas transnacionales en la economía argentina. **Serie estudios y perspectivas**, n° 10, CEPAL, Buenos Aires: Naciones Unidas, 2002.

LABAQUI, Ignacio. ¿Negociando sobre la cubierta del Titanic? La Argentina y el FMI durante el gobierno de Eduardo Duhalde. **Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos A. Segreti"**, n° 11, 2011, en prensa.

MELTZER, Allan. Asian Problems and the IMF. **Cato Journal**, vol. 17, n° 3, 1998. pp. 267-274.

MINISTERIO DE ECONOMÍA. Assessment by the Government of Argentina of the IMF Staff Reports for the 2002 Article IV Consultation with Argentina. IMF. Argentina-Staff Report for the 2002 Article IV Consultation. **IMF Staff Country Report**, 03/226, Washington: IMF, 2003.

MUSSA, Michael. **Argentina y el FMI. Del triunfo a la tragedia**. Argentina: Editorial Planeta, 2002.

ONNO DE BEAUFORT WIJNHOLDS, J. The Argentine Drama: A View from the IMF Board. TEUNISSEN, J. and AKKERMAN, A. (eds.): **The crisis that was not prevented. Lessons for Argentina, the IMF, and Globalisation**. The Hague: Fondad, 2003. pp. 101-119.

RAPETTI, Martín. La Macroeconomía Argentina durante la Post-convertibilidad: Evolución, Debates y Perspectivas. **Policy Paper Series**, n° 5, Observatorio Argentina, New York University, 2005. Disponible en: <http://www.argentinaobservatory.org/documents/publications/ewg_pp5.pdf>.

REMES LENICOV, Jorge, TODESCA, Jorge y RATTI, Eduardo. **La crisis argentina**. Mimeo, 2002.

STIGLITZ, Joseph. **El malestar en la globalización**. Argentina: Editorial Taurus, 2002.

STILES, Kendall. **Negotiating Debt. The IMF Lending Process**. Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press, 1991.

Temas y Debates, año 15, nº 22, UNR, 2011b. pp. 87-113.

TENEMBAUM, Ernesto. **Enemigos**. Buenos Aires: Norma, 2004.

TODESCA, Jorge. **El mito del país rico**. Buenos Aires: Emecé Editores, 2006.

WOODS, Ngaire. **The Globalizers. The IMF, the World Bank and Their Borrowers**. Ithaca and London: Cornell University Press, 2006.

Artigo recebido dia 14 de janeiro de 2013. Aprovado em 20 de agosto de 2013.

RESUMO

Em 2002 o Governo argentino tentou, sem sucesso, chegar a um acordo com o FMI para moderar o impacto da crise econômica que eclodiu após o fim da conversibilidade. Este artigo analisa a intervenção do FMI durante esse período, especificando os fatores que explicam a sua intransigência e como ela ajudou a criar uma situação de dominação sobre o Governo. Conclui-se que somente quando o Governo virou para uma posição de confronto alterou o curso da negociação e chegou ao acordo.

PALAVRAS-CHAVE

Negociações internacionais, Dominação, FMI, Argentina.

RESUMEN

En 2002 el gobierno argentino intentó sin éxito llegar a un acuerdo con el FMI, para moderar el impacto de la crisis económica que se desató después del fin de la convertibilidad. En este trabajo se analiza la intervención del FMI en ese período, con indicación de los factores que explican su intransigencia y la forma en que ha contribuido a establecer una situación de dominación sobre el gobierno. Llegamos a la conclusión de que sólo cuando el gobierno se convirtió en un lugar de confrontación hizo cambiar el curso de la negociación y llegar a un acuerdo.

PALABRAS CLAVE

Negociaciones internacionales, Dominación, FMI, Argentina.

ABSTRACT

In 2002 the Argentine government tried unsuccessfully to reach an agreement with the IMF, to moderate the impact of the economic crisis that erupted after the end of convertibility. This paper analyzes the IMF intervention during that period, specifying the factors that explain their intransigence and how it contributed to establish a situation of domination over the government. We conclude that only when the government turned into a confrontational position did change the course of negotiation and reached an agreement.

KEYWORDS

International negotiations, Domination, IMF, Argentina